

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Puerto Montt
CAUSA ROL : C-3315-2018
CARATULADO : RUPAYÁN/ALMONACID

PUERTO MONTT, cuatro de febrero de dos mil veinte.-

VISTOS:

Que, la presente causa Rol N°3315-2018, fue presentada a tramitación con fecha 13 de julio de 2018 (Folio 1), por doña **Giovannina Andrea Ojeda Alarcón**, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio Civil de Puerto Montt, con domicilio en calle Rancagua N°138, de esta ciudad; en representación convencional de doña **Rosa Alejandra Rupayán Vidal**, chilena, cédula nacional de identidad N°17.198.962-0, soltera, trabajadora, domiciliada en Sector Estero Quellón S/N, ciudad y comuna de Quellón; y, en lo principal expone:

Que, viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios, en juicio sumario, en contra de don **Juan Humberto Montiel Oyarzún**, chofer, domiciliado en calle Balcón del Cerro N°180, Calbuco, y **de Transportes Cruz del Sur Limitada**, empresa del giro de su denominación, Rut 80.938.500-6, representada por don **Luis Almonacid Villarroel**, desconoce profesión u oficio, ambos domiciliado en Pilpilco, S/N, Puerto Montt; el primero en calidad de autor y la segunda en calidad de solidariamente responsable del delito de lesiones menos graves en la persona de su representada; en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Que, en cuanto a los hechos. Señala, que con fecha 12 de agosto del año 2015, aproximadamente a las 7:45 horas, en circunstancias que su representada viajaba en el bus Cruz del Sur, tipo Pullman, patente PPU DZFR-69, conducido por don Juan Humberto Montiel Oyarzún, por la Ruta 5 Sur, a la altura del sector Tara S/N, de la comuna de Chonchi, a una velocidad no razonable ni prudente con respecto al diseño y condiciones de la vía -curva hacia la derecha y calzada húmeda- proyectándose de forma tangencial al diseño de la vía, sobrepasando el eje central de la calzada, perdiendo el control del móvil y atropellando a don Richard Ariel Andrade Figueroa, quien falleció en el lugar y que momentos antes había sido atropellado por doña Patricia Noemí Ruiz Mella. En el asiento correspondiente a la primera fila, lado derecho-pasillo del referido bus viajaba su representada, quien resultó con las siguientes lesiones: herida contusa a colgajo frontociliar derecha, tec simple, hipoesteria fondo parietal derecho y fractura nasal con incapacidad de 10 días y pronóstico de mediana gravedad.



Agrega, que las lesiones provocadas por el accidente fueron calificadas como lesiones menos graves, según consta en requerimiento y sentencia dictada en audiencia de procedimiento simplificado celebrada con fecha 28 de agosto de 2017, ante el Juzgado de Garantía de Castro, audiencia en la que se procedió a dictar sentencia condenatoria previo reconocimiento de los hechos por parte del demandado.

Que, con motivo de las lesiones su mandante debió someterse a 10 sesiones de kinesiología atendido que no tenía sensibilidad en la piel. Además, de lo anterior continuó sufriendo constantes mareos, lo que le ha dificultado volver a insertarse laboralmente. A todo lo anterior, cabe agregar que como consecuencia del accidente su representada quedó con una cicatriz de 8 a 10 centímetros en la frente.

Que, en consecuencia, en su opinión concurren todos y cada uno de los requisitos legales para impetrar la presente acción indemnizatoria de perjuicios.

Que, en cuanto al daño. Señala, que el daño que se ha causado a su representada en razón de los hechos descritos, se puede desglosar del modo y por los montos que a indica:

- Lucro cesante: Como consecuencia del accidente y dado que estuvo 10 días sin trabajar el daño ocasionado asciende a la suma de \$300.000, atendido que a la fecha del accidente percibía una remuneración de \$30.000 diarios; su representada se desempeñaba en labores de desconche de erizos en una empresa cuyo nombre es Girazul S.P.A.

- Daño moral: El daño que sufrió por el accidente, le generó a su representada un gran sufrimiento y molestia en su integridad psíquica y moral. Producto de lo ocurrido le quedó, como ya se dijo, una cicatriz de 8 a 10 centímetros en su frente, a lo que se debe sumar el dolor, molestias, malos ratos y rabia, sufridos y el temor que aún arrastra de viajar en vehículos de locomoción colectiva. Por lo expuesto, su parte avalúa el daño moral causado en la suma de \$30.000.000.

Que, el total de las sumas demandadas tendrían el valor de \$30.300.000, que deberán ser pagados reajustados, más intereses, calculados entre la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia y aquella en que se pague efectivamente.

Que, en cuanto al derecho. Señala, que los hechos descritos son constitutivos del delito de lesiones, de modo que conforme a lo dispuesto por los artículos 1437 y 2284 del Código Civil generan obligaciones para su autor, las que en concreto se traducen en la obligación de indemnizar a la víctima por el daño



inferido en conformidad a lo dispuesto por el artículo 2314, 2317 y 2329 del Código Civil.

Que, en los hechos fundantes de la demanda concurren todos y cada uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la indemnización reparatoria, siendo los siguientes:

- 1.- La capacidad delictual o cuasidelictual (artículo 2319 Código Civil).
- 2.- La imputabilidad, por cuanto no basta con causar daño a otro para que se genere la obligación de indemnizar perjuicios. Es necesario, que el acto o hecho que produce el daño sea resultado de una conducta dolosa o culpable del actor, lo que se infiere del artículo 2314 del Código Civil. En relación con los hechos de la causa, es claro que el conductor del bus tuvo una conducta imprudente, pues, no manejaba a una velocidad razonable ni prudente atendida las circunstancias del tránsito, aún más, el mismo chofer del bus reconoce su responsabilidad en los hechos, en sentencia definitiva dictada en procedimiento simplificado seguido en su contra, en causa Rit 1811-2015.
- 3.- Existencia de un daño (artículo 2314 del Código Civil), entendiendo que existe daño cuando este es causado por una persona distinta del ofendido, que afecte un derecho o interés legítimo de la víctima, que sea cierto, directo y que no se encuentre reparado.
- 4.- Que, entre el hecho u omisión culpable y el daño causado exista un nexo causal (artículos 2319 y 2329 del Código Civil), que en el caso de autos, el daño causado, es la consecuencia directa e inmediata del ilícito cometido.

Que, además, hace mención a los artículos 1556, 2314 inciso primero, 2329, y 2317 inciso primero, todos del Código Civil.

Que, este procedimiento se rige por las reglas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil sobre juicio sumario.

Previa las citas legales solicita al tribunal tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios, en juicio sumario, en contra de don **Juan Humberto Montiel Oyarzún y Transporte Cruz del Sur Limitada**, representado para estos efectos por don **Luis Almonacid Villaroel**, ambos ya individualizados, el primero como autor del daño y el segundo como solidariamente responsable, acogerla en todas sus partes, y en definitiva condenarle a que pague a su representada la suma de **\$30.300.000** o lo que el tribunal, estime en justicia determinar, más intereses y reajustes según el alza que experimente el I.P.C., desde la fecha de la sentencia definitiva hasta la del pago efectivo, mediante liquidación que practicará el Sr. Secretario del Tribunal; o, lo que el tribunal, se sirva fijar, más intereses y costas.



Con fecha 05 de septiembre de 2018 (Folio 14- Folio E3E), se notificó personalmente a don Juan Humberto Montiel Oyarzún, de la demanda y su proveído.

Con fecha 05 de febrero de 2019 (Folio 21), se notificó en conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a don Luis Almonacid Villarroel, en representación de la demandada Transportes Cruz del Sur Limitada, de la demanda y su proveído.

Con fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 31), se llevó a efecto la audiencia de contestación y conciliación, con la asistencia del apoderado de la parte demandada, del apoderado del demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún y el apoderado del demandado Transportes Cruz del Sur Limitada. El demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún, por escrito, en minuta agregada a la carpeta electrónica con la misma fecha (Folio 25), en lo principal opuso excepción dilatoria, y en el segundo otrosí contestó la demanda. El demandado Transportes Cruz del Sur Limitada, por escrito, en minuta agregada a la carpeta electrónica con la misma fecha (Folio 26), en lo principal opuso excepción dilatoria, y en el segundo otrosí contestó la demanda. Suspendiéndose de común acuerdo la audiencia.

En escrito de fecha 14 de febrero de 2019 (Folio 34), la demandante evacuó el traslado conferido respecto a las excepciones dilatorias.

Con fecha 21 de febrero de 2019 (Folio 36), se llevó a efecto la continuación de la audiencia de fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 31), con la asistencia del apoderado de la parte demandada, del apoderado del demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún y el apoderado del demandado Transportes Cruz del Sur Limitada. El tribunal llamó a las partes a conciliación, la que no se produce.

En resolución de fecha 25 de febrero de 2019 (Folio 37), se recibió la causa a prueba, fijándose cinco puntos de pruebas, agregándose dos puntos de prueba en resolución de fecha 12 de noviembre de 2019 (Folio 61).

En resolución de fecha 23 de enero de 2020 (Folio 78), se citó a las partes a oír sentencia.-

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DILATORIA FORMULADA POR EL DEMANDADO DON JUAN HUMBERTO MONTIEL OYARZÚN:

PRIMERO: Que, en audiencia de fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 31), el demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún, por escrito, en minuta agregada a la carpeta electrónica con la misma fecha (Folio 25), en lo principal, opuso excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil,



esto es, la ineptitud del libelo por razón de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, y expone:

Que, la excepción se plantea en relación con el artículo 254 números 2 y 4 del cuerpo legal ya referido. En cuanto al numeral 2 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, dicha norma establece que la demanda debe contener “el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y de la naturaleza de la representación”. Ello, en cuanto de la simple lectura de la demanda, se desprende que no se señala cual es la naturaleza de la representación de la abogada doña Giovannina Andrea Ojeda Alarcón, para comparecer en representación de doña Rosa Alejandra Rupayán. En este sentido, para que una demanda sea válida y capaz de trabar una relación procesal sana, ella debe contener todos y cada uno de los requisitos que indica el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, los que deben reunirse al momento de notificarse al demandado, situación que no ha ocurrido en la especie.

Que, esta situación puede significar un perjuicio a su parte, puesto que además de haberse omitido un requisito fundamental en la demanda, lo cual implica su ineptitud, ello determina además que no tiene conocimiento de quién es el representante legal de la demandante.

Que, en cuanto al numeral 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, establece que la demanda debe contener “la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya”. Al respecto, los demandantes reclaman una millonaria indemnización de parte de su representado; sin embargo, nada dice a lo largo de la presentación que justifique tal pretensión, no indica en forma concreta cuál es el tipo de daño que alega ni mucho menos cuál es el ámbito de responsabilidad en el cual se demanda.

Que, su parte estima que no basta la sola referencia al accidente de tránsito del 12 de agosto del año 2015, para dar por satisfecho el requisito que exige el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a exponer claramente los hechos y fundamentos de derecho en que apoya sus pretensiones, pues de lo contrario, su parte queda en indefensión respecto de aquellos hechos, no pudiendo desmentirlos ni rendir si quiera probanza alguna a su respecto, pues en definitiva, no saben en forma precisa, cuáles serían los supuestos daños demandados.

Termina solicitando tener por deducida excepción dilatoria de ineptitud del libelo contemplada en el artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el número 4° del artículo 254 del mismo cuerpo legal, acogerla a tramitación y en definitiva se acoja la excepción, y se declare que la demanda es inepta por no señalarse quién es el representante



legal de la demandante, ni la naturaleza de la representación de quienes han comparecido por ella, y por no contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y que en tanto, no se rectifiquen dichos vicios, no le corre plazo a su parte para contestar la demanda, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, en escrito de fecha 14 de febrero de 2019 (Folio 34), la demandante evacuó el traslado conferido respecto a la excepción dilatoria, solicitando su rechazo, en atención a las siguientes consideraciones:

Que, como bien señala el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la demanda debe contener “el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y de la naturaleza de la representación”, y así las cosas, según consta de la demanda de autos, su parte especificó que se trata de una “representación convencional”, acompañando en el primer otrosí de la presentación, el mandato judicial de fecha 3 de abril del año 2017, anotado en el Repertorio 335-2017 del Notario Público de Quellón, don Claudio Alejandro Cabello Olavarría.

Que, el mandato judicial es un contrato solemne en virtud del cual una persona otorga a otra facultades suficientes para que la represente ante los Tribunales de Justicia, y que como tal, tiene elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales. En efecto, son de la esencia del mandato judicial, las facultades a que se refiere el artículo 7 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil, en cuanto indica que el poder para litigar se entiende conferido para todo el juicio en que se presente y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, autoriza al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría hacerlo el poderdante en los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan, hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva. Es decir, la demanda contiene todos y cada uno de los requisitos que indica el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en este caso en concreto, la representación por parte de la abogada Giovannina Ojeda Alarcón, claramente individualizada en la presentación y acreditada por el mandato judicial respectivo, razón por la cual la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 254 numeral 2 del mismo cuerpo legal, deberá rechazarse por no tener sustento alguno.

Que, en relación a la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 relacionado con el artículo 254 numeral 4 del Código del Procedimiento Civil, esto es, la falta de exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, cabe señalar que están claramente expuestos los fundamentos en los que apoya sus pretensiones, y si los demandados ponen en tela de juicio el monto de la



indemnización de perjuicios, la vía para discutirlo no es la procastinatoria, cuyo único objeto es corregir los vicios del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida, por lo que para discutir el fondo del asunto, la contraria deberá hacerlo a través de las vías legales y en la etapa procesal que establece la ley.

Termina solicitando tener por evacuado el traslado, y en definitiva, se sirva rechazar con costas la excepción opuesta.

TERCERO: Que, el demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún opone la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil, fundándola en dos circunstancias.

Que, la primera circunstancia dice relación con el artículo 254 N°2 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que no se señalaría cual es la naturaleza de la representación de la abogada doña Giovannina Andrea Ojeda Alarcón, para comparecer en representación de doña Rosa Alejandra Rupayán. De una simple lectura de la demanda de fecha 13 de julio de 2018 (Folio 1), es posible constatar que doña Giovannina Andrea Ojeda Alarcón, indica que comparece en representación convencional de doña Rosa Alejandra Rupayán, y en el segundo otrosí indica que en su calidad de abogada asume el patrocinio, según consta en mandato que acompaña, lo cual es efectivo, además con fecha 19 de julio de 2018 (Folio 3) el Ministro de Fe del Tribunal autorizó el poder que le otorgaron a la abogada compareciente; razón por la cual el tribunal rechazará el primer fundamento de la excepción.

Que, en cuanto al segundo fundamento de la excepción, que dice relación con el artículo 254 N°4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por no contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, al no indicar en forma concreta cual es el tipo de daño alegado ni el ámbito de responsabilidad en la cual se demanda. De una simple lectura el tribunal constata que la demanda contiene una exposición claro de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. En efecto, se indican las indemnizaciones demandas (lucro cesante y daño moral), y la responsabilidad que se le atribuya a cada uno de los demandados, y las normas en que se fundamenta; razón por la cual el tribunal rechazará el segundo fundamento de la excepción. Además, se tiene presente que el demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún, contestó la demanda.

Que, atendido lo expuesto se rechazará en todas sus partes la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil formulada por el demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún.-



**EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DILATORIA FORMULADA POR
EL DEMANDADO TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LIMITADA:**

CUARTO: Que, en audiencia de fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 31), el demandado Transportes Cruz del Sur Limitada, por escrito, en minuta agregada a la carpeta electrónica con la misma fecha (Folio 26), en lo principal, opuso excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la ineptitud del libelo por razón de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, y expone:

Que, la excepción se plantea en relación con el artículo 254 números 2 y 4 del cuerpo legal ya referido. En cuanto al numeral 2 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, dicha norma establece que la demanda debe contener “el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y de la naturaleza de la representación”. De la simple lectura de la demanda, se desprende que no se señala cual es la naturaleza de la representación de la abogada doña Giovannina Andrea Ojeda Alarcón, para comparecer en representación de doña Rosa Alejandra Rupayán. En este sentido, para que una demanda sea válida y capaz de trabar una relación procesal sana, ella debe contener todos y cada uno de los requisitos que indica el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, los que deben reunirse al momento de notificarse al demandado, situación que no ha ocurrido en la especie.

Que, esta situación puede significar un perjuicio a su parte, puesto que además de haberse omitido un requisito fundamental en la demanda, lo cual implica su ineptitud, ello determina además que no tiene conocimiento de quién es el representante legal de la demandante.

Que, en cuanto al numeral 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, establece que la demanda debe contener “la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya”. Al respecto, los demandantes reclaman una millonaria indemnización de parte de su representado; sin embargo, nada dice a lo largo de la presentación que justifique tal pretensión, no indica en forma concreta cuál es el tipo de daño que alega ni mucho menos cuál es el ámbito de responsabilidad en el cual se demanda.

Que, su parte estima que no basta la sola referencia al accidente de tránsito del 12 de agosto del año 2015, para dar por satisfecho el requisito que exige el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a exponer claramente los hechos y fundamentos de derecho en que apoya sus pretensiones, pues de lo contrario, su parte queda en indefensión respecto de aquellos hechos, no pudiendo desmentirlos ni rendir si quiera probanza alguna a su respecto, pues en definitiva, no saben en forma precisa, cuáles serían los supuestos daños



demandados. La discusión sobre la extensión de los daños es un aspecto fundamental en todo juicio indemnizatorio, por lo que se debe discutir sobre el punto.

Termina solicitando tener por deducida excepción dilatoria de ineptitud del libelo contemplada en el artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el número 4° del artículo 254 del mismo cuerpo legal, acogerla a tramitación y en definitiva se acoja la excepción, y se declare que la demanda es inepta por no señalarse quién es el representante legal de la demandante, ni la naturaleza de la representación de quienes han comparecido por ella y por no contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y que en tanto, no se rectifiquen dichos vicios, no le corre plazo a su parte para contestar la demanda, todo ello con costas.

QUINTO: Que, en escrito de fecha 14 de febrero de 2019 (Folio 34), la demandante evacuó el traslado conferido respecto a la excepción dilatoria, solicitando su rechazo, en atención a las siguientes consideraciones:

Que, como bien señala el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la demanda debe contener “el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y de la naturaleza de la representación”, y así las cosas, según consta de la demanda de autos, su parte especificó que se trata de una “representación convencional”, acompañando en el primer otrosí de la presentación, el mandato judicial de fecha 3 de abril del año 2017, anotado en el Repertorio 335-2017 del Notario Público de Quellón, don Claudio Alejandro Cabello Olavarría.

Que, el mandato judicial es un contrato solemne en virtud del cual una persona otorga a otra facultades suficientes para que la represente ante los Tribunales de Justicia, y que como tal, tiene elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales. En efecto, son de la esencia del Mandato Judicial, las facultades a que se refiere el artículo 7 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil, en cuanto indica que el poder para litigar se entiende conferido para todo el juicio en que se presente y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, autoriza al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría hacerlo el poderdante en los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan, hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva. Es decir, la demanda contiene todos y cada uno de los requisitos que indica el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en este caso en concreto, la representación por parte de la abogada Giovannina Ojeda Alarcón, claramente individualizada en la presentación y acreditada por el



mandato judicial respectivo, razón por la cual la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 254 numeral 2 del mismo cuerpo legal, deberá rechazarse por no tener sustento alguno.

Que, en relación a la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 relacionado con el artículo 254 numeral 4 del Código del Procedimiento Civil, esto es, la falta de exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, cabe señalar que están claramente expuestos los fundamentos en los que apoya sus pretensiones, y si los demandados ponen en tela de juicio el monto de la indemnización de perjuicios, la vía para discutirlo no es la procrastinatoria, cuyo único objeto es corregir los vicios del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida, por lo que para discutir el fondo del asunto, la contraria deberá hacerlo a través de las vías legales y en la etapa procesal que establece la ley.

Termina solicitando tener por evacuado el traslado, y en definitiva, se sirva rechazar con costas la excepción opuesta.

SEXTO: Que, el demandado Transportes Cruz del Sur Limitada opone la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil, fundándola en dos circunstancias.

Que, la primera circunstancia dice relación con el artículo 254 N°2 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que no se señalaría cual es la naturaleza de la representación de la abogada doña Giovannina Andrea Ojeda Alarcón, para comparecer en representación de doña Rosa Alejandra Rupayán. De una simple lectura de la demanda de fecha 13 de julio de 2018 (Folio 1), es posible constatar que doña Giovannina Andrea Ojeda Alarcón, indica que comparece en representación convencional de doña Rosa Alejandra Rupayán, y en el segundo otrosí indica que en su calidad de abogada asume el patrocinio, según consta en mandato que acompaña, lo cual es efectivo, además con fecha 19 de julio de 2018 (Folio 3) el Ministro de Fe del Tribunal autorizó el poder que le otorgaron a la abogada compareciente; razón por la cual el tribunal rechazará el primer fundamento de la excepción.

Que, en cuanto al segundo fundamento de la excepción, que dice relación con el artículo 254 N°4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por no contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, al no indicar en forma concreta cual es el tipo de daño alegado ni el ámbito de responsabilidad en la cual se demanda. De una simple lectura el tribunal constata que la demanda contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. En efecto, se indican las indemnizaciones demandadas (lucro cesante y daño moral), y la responsabilidad que se le atribuya a cada uno de los demandados, y las normas en que se



fundamenta; razón por la cual el tribunal rechazará el segundo fundamento de la excepción. Además, se tiene presente que el demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún, contestó la demanda.

Que, atendido lo expuesto se rechazará en todas sus partes la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil formulada por el demandado Transportes Cruz del Sur Limitada.-

EN CUANTO AL FONDO:

SÉPTIMO: Que, la presente causa Rol N°3315-2018, fue presentada a tramitación con fecha 13 de julio de 2018 (Folio 1), por doña **Giovannina Andrea Ojeda Alarcón**, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio Civil de Puerto Montt, en representación convencional de doña **Rosa Alejandra Rupayán Vidal**, quien interponer demanda de indemnización de perjuicios en juicio sumario, en contra de don **Juan Humberto Montiel Oyarzún**, en calidad de autor del daño, y de **Transportes Cruz del Sur Limitada**, representada por don **Luis Almonacid Villarroel**, en calidad de solidariamente responsable, por los fundamentos de hecho y derecho ya consignados en la parte expositiva de esta sentencia, solicitando acogerla en todas sus partes, y en definitiva condenarle a que paguen a su representada la suma de **\$30.300.000** (\$300.000 por concepto de lucro cesante y \$30.000.000 por concepto de daño moral) o lo que el tribunal, estime en justicia determinar, más intereses y reajustes según el alza que experimente el I.P.C., desde la fecha de la sentencia definitiva hasta la del pago efectivo, mediante liquidación que practicará el Sr. secretario del Tribunal; o lo que el tribunal, se sirva fijar, más intereses y costas.

OCTAVO: Que, con fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 31), se llevó a efecto la audiencia de contestación y conciliación, con la asistencia del apoderado de la parte demandada, del apoderado del demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún y el apoderado del demandado Transportes Cruz del Sur Limitada. El demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún, por escrito, en minuta agregada a la carpeta electrónica con la misma fecha (Folio 25), en el segundo otrosí contestó la demanda. El demandado Transportes Cruz del Sur Limitada, por escrito, en minuta agregada a la carpeta electrónica con la misma fecha (Folio 26), en el segundo otrosí contestó la demanda. Suspendiéndose de común acuerdo la audiencia.

Que, con fecha 21 de febrero de 2019 (Folio 36), se llevó a efecto la continuación de la audiencia de fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 31), con la asistencia del apoderado de la parte demandada, del apoderado del demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún y el apoderado del demandado Transportes



Cruz del Sur Limitada. El tribunal llamó a las partes a conciliación, la que no se produce.

NOVENO: Que, como se señaló en el considerando anterior, el demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún, contestó la demanda por escrito, en el segundo otrosí de la minuta agregada a los autos con fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 25), solicitando su total rechazo, y expone:

Que, en cuanto a los hechos efectivamente ocurridos. Señala, que los hechos en esta causa si bien son bastante simples, son relevantemente distintos a los que indica la demandante. Efectivamente el día 12 de agosto de 2015, don Juan Humberto Montiel Oyarzún, conducía el bus de propiedad de Transportes Cruz del Sur, patente DZFR-69 por la Ruta 5 Sur a la altura del sector Tara sin número, de la comuna de Chonchi. Alrededor de las 07:45 horas, mientras iba conduciendo, por la Ruta 5 Sur, en el sector ya mencionado, el conductor vio un bulto en el camino que correspondía al cuerpo de don Richard Ariel Andrade Figueroa, quien había sido atropellado por doña Patricia Noemí Ruíz Mella, conductora de la camioneta placa patente WW2722, lo que generó la pérdida del control del bus, toda vez, que su representado, intentó esquivar el bulto que se encontraba en la carretera, sin saber que correspondía al cuerpo de una persona, razón por la cual salió hacia la berma y se desplazó al sitio junto a la ruta.

Que, como defensa, señala que aclarados los hechos, su parte niega todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, la que es absolutamente improcedente, ello por diversos motivos.

Que, en cuanto a los hechos. Señala, que el accidente se debió a un hecho fortuito. Sin embargo, la demandante atribuye dicho accidente a una situación específica y clara que consiste en la supuesta conducción desatenta de su representado a las condiciones del tránsito del momento, y a una mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable y prudente, situación que no es efectiva, siendo carga del actor probar sus dichos en este sentido.

Que, lo que se imputa a su representado son dos circunstancias, la supuesta conducción desatenta a las condiciones del tránsito del momento, y además, la conducción a una velocidad mayor a la permitida o a una velocidad no razonable y prudente, circunstancias todas que habrán de ser acreditadas, y que su parte niega. Como se dijo, el accidente se produjo por un hecho fortuito, derivado del atropello de una persona por un tercero, lo que hizo que el chofer al intentar esquivarlo perdiera el control del bus, ya que se encontraba en la calzada.

Que, en este sentido, aún en el improbable caso que la demandada lograra acreditar ambas situaciones, esto es, una conducción desatenta y a



exceso de velocidad o a una velocidad mayor a la prudente, en caso de suprimirse mentalmente estas, no cabe duda que de todas maneras se hubiese producido el accidente y su resultado dañoso; ya que nadie pudo prever que la conductora doña Patricia Noemí Ruíz Mella atropellara a don Richard Andrade Figueroa, quedando su cuerpo en la ruta. En cambio, si se suprime mentalmente ésta situación, en ningún caso se habría producido el accidente, aunque el chofer hubiese ido a exceso de velocidad, y que el impacto se produjo de forma intempestiva al ser desviado el cuerpo por el primer atropello.

Que, cabe agregar, que la demandante, al momento del accidente no utilizaba el cinturón de seguridad con el que contaba el bus, contraviniendo la obligación legal impuesta por el artículo 75 de la Ley del Tránsito, por lo que pueden estimar que la actora se expuso imprudentemente al daño sufrido, siendo negligente en su actuar.

Que, alega la inexistencia de responsabilidad por parte de su representado. Señala, que la demandante cita una serie de normas del Código Civil, relativas al delito y cuasidelito civil, así como los requisitos para que se configure responsabilidad extracontractual.

Que, en el caso de autos, para el análisis de la procedencia de la acción indemnizatoria, deben tenerse presente los elementos que componen la responsabilidad extracontractual, que son los siguientes: a) Una acción u omisión del sujeto o hechor; b) La existencia de daño en la víctima; c) Que la acción u omisión del hechor sea imputable a dolo o culpa suya; d) Relación de causalidad entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño producido; y, e) La ausencia de un elemento eximente de responsabilidad.

Que, sólo una vez cumplidos todos estos elementos, podría tenerse por establecida alguna responsabilidad de su representado en los hechos, situación que se ve poco probable, pues el elemento de imputabilidad de la conducta del hechor, esto es, que el hecho de haberse producido el accidente sea imputable a dolo o culpa al actuar de su representado, cabe señalar que si bien existe sentencia condenatoria ante el Juzgado de Garantía de Castro, como bien indica la demandante, esto se debe a que su representado reconoció responsabilidad en juicio simplificado, lo que como se sabe, sucede con la finalidad de acceder a penas más bajas y a evitar un juicio. Es así, que no existe una acción u omisión que haya determinado la existencia de culpa y consecuentemente la responsabilidad de su representado, como causa del accidente de tránsito que se imputa, que habilite a la demandante solicitar la reparación por vía de indemnización civil de los daños eventualmente causados.

Que, además, como ya señaló, la demandante se expuso



imprudentemente al daño, toda vez no se encontraba con cinturón de seguridad, lo cual es obligatorio según la Ley 20.508.

Que, la causa penal y las eventuales condenas no son en relación a la demandante, por lo que el efecto relativo de las sentencias impide extenderlo a la demanda de autos.

Que, es por todo lo expuesto, que la demanda no puede sino ser rechazada en todas sus partes respecto de su representado.

Que, en subsidio, en cuanto a las sumas demandadas. Señala, que sin perjuicio que estiman que su representada no puede ser condenada en lo absoluto en estos autos por los motivos ya expuestos, los montos que demanda la actora, son desproporcionados y abusivos, pretendiendo la suma de 30 millones de pesos por un daño moral que malamente justifica, pues incluso, lo circunscribe a detrimentos de carácter físico, pero que no necesariamente implican la existencia del daño moral alegado. A esto se debe agregar que, tal como señala en su acción, como consecuencia del accidente estuvo 10 días sin trabajar, lo cual no justifica el monto excesivo que solicita como consecuencia del daño moral supuestamente sufrido, toda vez 10 días sin trabajar son insuficientes para la cuantía del daño moral que solicita.

Dicho lo anterior, la demandante en todo caso, habrá de acreditar la efectividad del supuesto daño moral sufrido, si existió, así como su cuantía.

Que, igualmente invocan el art. 2330 del Código Civil, en cuanto a la reducción de la indemnización del daño, por la exposición imprudente al mismo.

Que, es por todo lo anterior, que para el improbable caso de una condena, su parte solicita que sea regulada prudencialmente en el monto mínimo.

Termina solicitando tener por contestada la demanda interpuesta, rechazándola en todas sus partes, todo con costas, y en subsidio de lo anterior, para el caso improbable de condena, sea regulada en un monto mínimo.

DÉCIMO: Que, como se señaló en el considerando anterior, el demandado Transportes Cruz del Sur Limitada, contestó la demanda por escrito, en el segundo otrosí de la minuta agregada a los autos con fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 26), solicitando su total rechazo, y expuso:

Que, en cuanto a los hechos efectivamente ocurridos. Señala, que los hechos son relevantemente distintos a los que indica la demandante. Efectivamente el día 12 de agosto de 2015, don Juan Humberto Montiel Oyarzún, conducía el bus de propiedad de su representada, marca Mercedes Benz, patente DZFR-69 por la Ruta 5 Sur a la altura del sector Tara sin número, de la comuna de Chonchi. Alrededor de las 07:45 horas, mientras conducía, por la Ruta 5 Sur, en el sector ya mencionado, el chofer vio un bulto en el camino que correspondía al



cuerpo de don Richard Ariel Andrade Figueroa, quien había sido atropellado por doña Patricia Noemí Ruíz Mella, conductora de la camioneta placa patente WW2722, situación que generó la pérdida del control del bus, toda vez, que el chofer, intentó esquivar el bulto que se encontraba en la carretera, sin saber que correspondía al cuerpo de una persona, razón por la cual salió hacia la berma y se desplazó al sitio junto a la ruta.

Que, como defensa, señala que aclarados los hechos, su parte niega todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, la que es absolutamente improcedente, ello por diversos motivos.

Agrega, que su representada dentro de sus labores y giro comercial, cumple a cabalidad toda la normativa vigente en cuanto a capacitación de sus choferes para evitar accidentes de tránsito, pero a pesar de ello. hechos lamentables como los de la litis escapan la previsión de su representada.

Que, en cuanto a los hechos. Señala, que el accidente se debió a un hecho fortuito. Sin embargo, la demandante atribuye dicho accidente a una situación específica y clara que consiste en la supuesta conducción desatenta del chofer a las condiciones del tránsito del momento, y a una mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable y prudente, situación que no es efectiva, siendo carga del actor probar sus dichos en este sentido.

Que, lo que se imputa al chofer son dos circunstancias, la supuesta conducción desatenta a las condiciones del tránsito del momento, y la conducción a una velocidad mayor a la permitida o a una velocidad no razonable y prudente, circunstancias todas que habrán de ser acreditadas, y que su parte niega. Como se dijo, el accidente se produjo por un hecho fortuito, derivado del atropello de una persona por un tercero, lo que hizo que el chofer perdiera el control al intentar esquivarlo, ya que se encontraba en la calzada.

Que, en este sentido, aún en el improbable caso que la demandada lograra acreditar ambas situaciones, esto es, una conducción desatenta y a exceso de velocidad o a una velocidad mayor a la prudente, en caso de suprimirse mentalmente estas, no cabe duda que de todas maneras se hubiese producido el accidente y su resultado dañoso; ya que nadie pudo prever que la conductora doña Patricia Noemí Ruíz Mella atropellara a don Richard Andrade Figueroa, quedando su cuerpo en la vía. En cambio, si se suprime mentalmente ésta situación, es decir, el atropello sufrido por don Richard Andrade Figueroa, en ningún caso se habría producido el accidente, aunque el chofer hubiese ido a exceso de velocidad o a una velocidad no razonable ni prudente, ya que el impacto se produjo de forma intempestiva al ser desviado el cuerpo por el primer atropello.



Que, cabe agregar, que la demandante, al momento del accidente no utilizaba el cinturón de seguridad con el que contaba el bus de su representada, contraviniendo la obligación legal impuesta por el artículo 75 de la Ley del Tránsito, por lo que pueden estimar que la actora se expuso imprudentemente al daño sufrido, siendo negligente en su actuar. De manera que las consecuencias sufridas por la demandante exceden la esfera de control de su representada, siendo el resultado de la actividad imprudente de doña Rosa Rupayán.

Que, alega la inexistencia de responsabilidad por parte de su representada. Señala, que la demandante cita una serie de normas del Código Civil, relativas al delito y cuasidelito civil, así como los requisitos para que se configure responsabilidad extracontractual.

Que, en el caso de autos, para el análisis de la procedencia de la acción indemnizatoria, deben tenerse presente los elementos que componen la responsabilidad extracontractual, que son los siguientes: a) Una acción u omisión del sujeto o hechor; b) La existencia de daño en la víctima; c) Que la acción u omisión del hechor sea imputable a dolo o culpa suya; d) Relación de causalidad entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño producido; y, e) La ausencia de un elemento eximente de responsabilidad.

Que, sólo una vez cumplidos todos estos elementos, podría tenerse por establecida alguna responsabilidad de su representado en los hechos, situación que se ve poco probable, pues el elemento de imputabilidad de la conducta del hechor, esto es, que el hecho de haberse producido el accidente sea imputable a dolo o culpa del chofer del bus en cuestión, cabe señalar que si bien existe sentencia ante el Juzgado de Garantía de Castro, como bien indica la demandante, esto se debe a que el chofer, reconoció responsabilidad en juicio simplificado, lo que como se sabe, sucede con la finalidad de acceder a penas más bajas y a evitar un juicio, y al efecto relativo de las sentencia impide que aquella condena produzca algún efecto respecto de su parte. Es así, que no existe una acción u omisión que haya determinado la existencia de culpa y consecuencialmente la responsabilidad del chofer, como causa del accidente de tránsito que se imputa, que habilite a la demandante solicitar la reparación por vía de indemnización civil de los daños eventualmente causados. En consecuencia, en esta causa, se debe probar o acreditar la responsabilidad para poder condenar a su representado al pago de alguna suma.

Que, lo anterior considerando, además, que su representada, más allá de ser la dueña del vehículo, ninguna participación tuvo en el accidente. De acuerdo a ello mal podría su parte ser condenada al pago de suma alguna, pues finalmente no le son imputables los daños demandados, en tanto, no se acredite la



negligencia infraccional del conductor, lo cual no ocurre por el hecho de reconocer responsabilidad el mismo, toda vez, que esto no indica que efectivamente haya sido probada su negligencia, sino que se realiza con el afán de evitar mayores penas, y evitar un juicio penal.

Que, la solidaridad del artículo 169 de la Ley del Tránsito tiene requisitos bien específicos, pues la norma establece que el propietario del vehículo es solidariamente responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, lo que requiere establecer, en forma previa o conjunta, que existe un usuario del vehículo que ha ocasionado perjuicios con el uso del vehículo, sin embargo no se ha logrado probar la responsabilidad del usuario, toda vez que fue condenado por reconocer responsabilidad, lo que obsta a la condena solidaria, pues no se puede establecer solidaridad del dueño, más aún si no es condenado en aquella causa penal, por lo que la sentencia no le empece. Adicionalmente, aquel reconocimiento no alcanza a la demandante, quien entiende no fue parte de la causa penal.

Que, en cuanto a los daños, estos deben ser acreditados, su parte niega su existencia, y conforme a las normas probatorias, corresponde su acreditación a la demandante.

Que, como ya señaló, la demandante se expuso imprudentemente al daño. Es por todo lo expuesto, que la demanda no puede sino ser rechazada en todas sus partes respecto de su representada.

Que, en subsidio, en cuanto a las sumas demandadas. Señala, que sin perjuicio que estiman que su representada no puede ser condenada en lo absoluto en estos autos por los motivos ya expuestos, los montos que demanda la actora, son desproporcionados y abusivos, pretendiendo la suma de 30 millones de pesos por un daño moral que malamente justifica, pues incluso, lo circunscribe a detrimentos de carácter físico, pero que no necesariamente implican la existencia del daño moral alegado. A esto se debe agregar que, tal como señala en su acción, como consecuencia del accidente estuvo 10 días sin trabajar, lo cual no justifica el monto excesivo que solicita como consecuencia del daño moral supuestamente sufrido, toda vez que 10 días sin trabajar son insuficientes para la cuantía del daño moral que solicita.

Dicho lo anterior, la demandante en todo caso, habrá de acreditar la efectividad del supuesto daño moral sufrido, si existió, así como su cuantía.

Que, adicionalmente el art. 2330 del Código Civil, dispone que la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente, lo que ocurre precisamente en el caso de autos, conforme lo expresado respecto del cinturón de seguridad.



Que, es por todo lo anterior, que para el improbable caso de una condena, su parte solicita que sea regulada prudencialmente en un monto mínimo.

Termina solicitando tener por contestada la demanda interpuesta, rechazándola en todas sus partes, todo con costas, y en subsidio de lo anterior, para el caso improbable de condena, sea regulada en un monto mínimo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en resolución de fecha 25 de febrero de 2019 (Folio 37), se recibió la causa a prueba, fijándose cinco puntos de pruebas, agregándose dos puntos de prueba en resolución de fecha 12 de noviembre de 2019 (Folio 61). Los demandados no rindió prueba. Durante el término probatorio y en las etapas procesales pertinentes, la parte demandante rindió las siguientes pruebas:

- 1.- Copia sentencia dictada en Procedimiento Simplificado por el Juzgado de Garantía de Castro, en causa Rit N°1811-2015, con fecha 28 de agosto de 2017 (Folio 1).
- 2.- Copia Parte Denuncia N°448, Fiscalía Local de Quellón (Folio 1).
- 3.- Copia Formulario de Atención de Urgencia DAU, Establecimiento: Hospital de Castro, N° de Atención: 222485, Admisión: 12/08/2015, de Rosa Alejandra Rupayán Vidal (Folio 1).
- 4.- Copia Epicrisis, Hospital de Quellón, Paciente: Rosa Alejandra Rupayán Vidal, de fecha 15/08/2015 (Folio 1).
- 5.- Copia Informe Tomografía Computada de Columna Cervical, Lumbar, y de Encéfalo, Paciente: Rosa Alejandra Rupayán Vidal, de fecha 15/08/2015 (Folio 1).
- 6.- Copia Solicitud de Interconsulta o Derivación, fecha de solicitud 1-9-2015, Paciente: Rosa Alejandra Rupayán Vidal (Folio 1).
- 7.- Documento que indica “Kinesiología” (Folio 1).
- 8.- Copia Dato de Atención de Urgencia (D.A.U), Hospital de Quellón, de fecha 02/09/2015, Nombre: Rosa Alejandra Rupayán Vidal (Folio 1).
- 9.- Copia Carnet de Control, Salud Mental, Nombre: Rosa Alejandra Rupayán Vidal (Folio 1).
- 10.- Certificado emitido con fecha 14 de enero de 2016 por el Dr. Fernando Maldonado H., Neurólogo (Folio 1).
- 11.- Copia Boleto Transportes Cruz del Sur, N°CDS/QU1/01069662, emitido con fecha 10/08/2015, Origen: Quellón, Destino: P. Montt-Terminal Municipal, Fecha de Viaje: Miércoles 12 de agosto de 2015, Hora de Viaje: 06:40 AM, Asiento: 4, Pasajero: Rosa Rupayán (Folio 1).
- 12.- Prueba testimonial rendida por la demandante (Folio 67). En efecto, en audiencia de fecha 20 de noviembre de 2019, declaran los testigos doña Viviana Irene Aguilera Bravo, y don Diego Eduardo Moncada Aguilera, sin tachas,



legalmente examinados, que dan razón de sus dichos que se encuentran consignados en dicha audiencia,

13.- Set de 2 fotografías (Folio 68).

Que, las copias de Boletos emitidos por Transportes Cruz del Sur, N°CDS/QU1/01072008, N°CDS/QU1/01072007, N°CDS/CA1/04416244, y N°CDS/CA1/04416245, si bien se encuentran agregados a la carpeta electrónica (Folio 1), estos no se ponderaran al valorar la prueba, por cuanto la parte demandante no los acompañó en escrito alguno.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los antecedentes anteriores constitutivos de presunciones judiciales, por ser graves, precisas y concordantes, acreditan:

1.- Que, con fecha 12 de agosto de 2015, alrededor de las 07:45 horas aproximadamente, doña Patricia Noemí Ruiz Mella, quien conducía la camioneta placa patente WW.2722, por la vía pública, Ruta 5 Sur, a la altura del Sector Tara S/N de la comuna de Chonchi, sobrepasó el eje central de la calzada y atropelló al peatón don Richard Ariel Andrade Figueroa; momentos después, en circunstancias que don Juan Humberto Montiel Oyarzún, conducía el bus placa patente, DZFR.69, por la vía pública, Ruta 5 Sur, a la altura del Sector Tara S/N de la comuna de Chonchi, a una velocidad no razonable ni prudente con respecto al diseño y condiciones de la vía –curva hacia la derecha y calzada húmeda– sobrepasando el eje central de la calzada, perdiendo el control del móvil, y atropellando al peatón don Richard Ariel Andrade Figueroa; y como pasajeros del bus conducido por don Juan Humberto Montiel Oyarzún, resultaron con lesiones don Walter Alexis Aguilar Maripani, doña Luperfina del Tránsito Tapia Orellana, doña Ivone del Rosario Avendaño Andrade, doña Jacqueline Jeanette Uribe Gallegos, don Exequiel Jonas Soto Silva, doña Analy Meneses Ojeda, doña Clotilde Ester Mardones Sandoval y doña Rosa Alejandra Rupayán Vidal (esta última demandante en esta causa).

2.- Que, en causa Rit N°1811-2015 seguida ante el Juzgado de Garantía de Castro, don Juan Humberto Montiel Oyarzún, fue condenado en su calidad de autor del delito culposo con resultado de homicidio, en perjuicio de Richard Ariel Andrade Figueroa, con resultado de lesiones menos graves, en perjuicio de Walter Alexis Aguilar Maripani, Ivonne del Rosario Avendaño Andrade, Exequiel Jonas Soto Silva, Rosa Alejandra Rupallan (o Rupayán) Vidal, Analí Meneses Ojeda y Clotilde Ester Mardones Sandoval y con resultado de lesiones graves en perjuicio de Luperfina del Tránsito Tapia Orellana y Jacqueline Jeannette Uribe Gallegos, ilícito previsto y sancionado en el artículo 490 N° 1 y 2, en relación con el artículo 391 N° 2, 399, 397 N° 2 y 492 del Código Penal, en relación con lo establecido en los artículos 108 y 144 de la Ley N° 18.290 de Tránsito, en estado de desarrollo de



CONSUMADO, hecho perpetrado en la comuna de Chonchi, el día 12 de agosto del año 2015, condenándole a sufrir la pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo y a la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena, a la suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por el término de seis meses y no se le condena en costas.

3.- Que, doña Rosa Alejandra Rupayán Vidal, a consecuencia del accidente acreditado en el N°1 de este considerando, sufrió lesiones menos graves.

DÉCIMO TERCERO: Que, la demandada Transportes Cruz del Sur Limitada al contestar la demanda reconoce expresamente ser propietaria de bus placa patente, DZFR.69 a la fecha del accidente, conducido por don Juan Humberto Montiel Oyarzún, este último –también demandado- quién también señala que el bus al momento del accidente era de propiedad de su empleador Transportes Cruz del Sur Limitada.

DÉCIMO CUARTO: Que, los demandados al contestar la demanda indican –en síntesis- que efectivamente el día 12 de agosto de 2015, don Juan Humberto Montiel Oyarzún, conducía el bus de propiedad de Transportes Cruz del Sur, patente DZFR-69, por la Ruta 5 Sur a la altura del sector Tara sin número, de la comuna de Chonchi, y que alrededor de las 07:45 horas, el conductor vio un bulto en el camino que correspondía al cuerpo de don Richard Ariel Andrade Figueroa, quien había sido atropellado por doña Patricia Noemí Ruíz Mella, conductora de la camioneta placa patente WW2722, lo que generó la pérdida del control del bus, por lo cual el accidente se debió a un hecho fortuito; y, que si bien existe sentencia condenatoria ante el Juzgado de Garantía de Castro, como bien indica la demandante, esto se debe a que don Juan Humberto Montiel Oyarzún reconoció responsabilidad en juicio simplificado, lo que como se sabe, sucede con la finalidad de acceder a penas más bajas y a evitar un juicio; alegaciones que en virtud de lo dispuesto en los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil no resultan pertinentes analizarlas en esta sentencia por cuanto ya fueron establecidas en el juicio penal donde resultó condenado el conductor del bus don Juan Humberto Montiel Oyarzún. Sin perjuicio de lo anterior, las demandadas no rindieron prueba.

DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a la alegación, efectuada por las demandadas en orden a que la demandante, al momento del accidente no utilizaba el cinturón de seguridad, contraviniendo el artículo 75 de la Ley de Tránsito, exponiéndose imprudentemente al daño, el tribunal la rechazará por cuanto las demandadas no rindieron prueba tendiente a acreditar sus alegaciones.



DÉCIMO SEXTO: Que, la responsabilidad del demandado Transportes Cruz del Sur Limitada deriva del artículo 169 inciso 2° de la Ley N°18.290, por ser propietario –a la fecha del accidente- del bus conducido por el demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún en el cual viajaba la demandante, el que le atribuye la calidad de responsable solidario; razón por lo cual no resulta pertinente la alegación del demandado Transportes Cruz del Sur Limitada, en orden a que no fue parte en la causa penal, teniendo presente además, lo expuesto en el considerando décimo cuarto de esta sentencia.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, encontrándose acreditado en los considerandos anteriores que la demandante el día del accidente viajaba en el bus placa patente DZFR.69, conducido por don Juan Humberto Montiel Oyarzún, bus de propiedad de la demandada -Transportes Cruz del Sur Limitada- a la fecha del accidente, no manteniéndose atento a las condiciones del tránsito del momento el chofer del bus, constituye la presunción de responsabilidad del conductor establecida en el artículo 167 N°2 de la Ley de Tránsito y sus modificaciones, por lo cual corresponde al tribunal determinar si proceden las indemnizaciones cobradas en la presente causa, por concepto de daño moral y lucro cesante.

DÉCIMO OCTAVO: Que, la demandante solicita en la parte petitoria de la demanda, que se le indemnice por los daños ocasionados en el accidente ocurrido con fecha 12 de agosto de 2015, y por concepto de lucro cesante solicita la suma total de \$300.000. Fundamenta su petición en que a la época del accidente se desempeñaba en labores de desconche de erizos en la empresa Girazul S.P.A., percibiendo una remuneración de \$30.000 diarios, y que estuvo 10 días sin trabajar.

Que, la prueba rendida por el demandante, consignada en el considerando décimo primero de esta sentencia, resulta insuficiente para acreditar la suma cobrada por concepto de lucro cesante, por cuanto no se acompañó prueba idónea que permitiese acreditar que la demandante ejercía alguna labor remunerada al momento del accidente, y que a causa de este dejó de percibir o percibió en menor medida dichos ingresos.

Que, atendido lo anterior, se rechazará la demanda en la parte que solicita el pago de una indemnización por concepto de lucro cesante.

DÉCIMO NOVENO: Que, la demandante solicita en la parte petitoria de la demanda, que se le indemnice por los daños ocasionados en el accidente ocurrido con fecha 12 de agosto de 2015, y por concepto de daño moral solicita la suma de \$30.000.000, por cuanto el accidente le generó un gran sufrimiento y molestia en su integridad psíquica y moral.



Que, el tribunal accederá a la indemnización solicitada por concepto de daño moral, teniendo presente que se encuentra acreditado que la demandante sufrió lesiones menos graves producto del accidente ocurrido con fecha 12 de agosto de 2015, lo que obviamente le causó una alteración en el desarrollo normal de su vida y aflicción, el tribunal regulará prudencialmente el monto de esta indemnización teniendo presente los antecedentes que obran en la causa, y tendrá en cuenta en la regulación, la facultad económica de los demandados, lo que se acredita con el sólo mérito de autos.

VIGÉSIMO: Que, en cuanto a la petición subsidiaria de los demandados, en orden a que resulta desproporcionada la suma cobrada por la demandante como indemnización, y que sea regulada en un monto mínimo, el tribunal accederá a esta petición en la forma que se indicará en la parte resolutive de esta sentencia.

Que, en cuanto a la petición de los demandados, que se aplique el artículo 2330 del Código Civil, el tribunal no accederá, por cuanto como ya se señaló, los demandados no rindieron prueba tendiente a acreditar a que la víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad.-

Y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 1698, 2314 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 160, 169, 170, 178, 180, 254, 680 y siguientes de Código de Procedimiento Civil; Ley N°18.290 y sus modificaciones; se **resuelve**:

1.- Que, se **RECHAZA** la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil formulada en audiencia de fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 31), por escrito, en lo principal de la minuta agregada con la misma fecha a la carpeta electrónica (Folio 25), por el demandado don Juan Humberto Montiel Oyarzún.

2.- Que, se **RECHAZA** la excepción dilatoria del artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil formulada en audiencia de fecha 11 de febrero de 2019 (Folio 31), por escrito, en lo principal de la minuta agregada con la misma fecha a la carpeta electrónica (Folio 26), por el demandado Transportes Cruz del Sur Limitada.

3.- Que, se **ACOGE** la demanda de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral formulada en lo principal del escrito de 13 de julio de 2018 (Folio 1), por doña **Giovannina Andrea Ojeda Alarcón** en representación de doña **Rosa Alejandra Rupayán Vidal** en contra de don **Juan Humberto Montiel Oyarzún, R.U.N.10.461.816-2**, en su calidad de conductor del bus placa patente DZFR-69, en el cual ocurrió el accidente de fecha 12 de agosto de 2018, y en contra de **Transportes Cruz del Sur Limitada, Rut N°80.983.500-6**,



representada legalmente por don **Luis Almonacid Villarroel**, en calidad de propietario del bus en que viajaba la demandante al momento del accidente. En consecuencia, los demandados deben pagar solidariamente a la demandante por concepto de daño moral la suma de **\$2.500.000**, más reajustes e intereses desde la fecha en que esta sentencia quede firme y ejecutoriada, y no ha lugar a lo demás.

4.- Que, se **RECHAZA** la demanda de indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante formulada en lo principal del escrito de 13 de julio de 2018 (Folio 1), por doña **Giovannina Andrea Ojeda Alarcón** en representación de doña **Rosa Alejandra Rupayán Vidal** en contra de don **Juan Humberto Montiel Oyarzún**, R.U.N.10.461.816-2, y en contra de **Transportes Cruz del Sur Limitada**, Rut N°80.983.500-6, representada legalmente por don **Luis Almonacid Villarroel**.

5.- Que, no se condena en costas a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida.-

ANÓTESE Y REGÍSTRESE.-

ROL N°3315-2018

DICTÓ DOÑA IRIS CATALINA OBANDO CÁRDENAS, JUEZ TITULAR.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Puerto Montt, cuatro de febrero de dos mil veinte.-**

